

vida&artes



sociedad

España duplica el consumo de sal aconsejado

Cuando la protesta llega hasta la puerta de casa

Los activistas contra los desahucios han dado un polémico paso para señalar a los políticos que no apoyan la dación en pago: la movilización frente a sus viviendas ● ¿Es legítima esta estrategia?

L. REVENTÓS / E. TEJEDOR

La plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha decidido señalar de manera directa a los políticos que no apoyan la Iniciativa Legislativa Popular por la dación en pago. Este tipo de señalamiento personal se conoce como *escrache*, y el primero se produjo ante la cúpula del Partido Popular, que se encontraba reunida en un hotel de Madrid. El segundo fue en Barcelona, frente a la vivienda de la concejal del mismo partido, Ángeles Esteller. Le siguieron otros, que afectaron al ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz; o al jefe de gabinete del presidente del Gobierno, Jorge Moragas.

El más reciente, el miércoles en Valencia, se realizó frente a la vivienda de Esteban González Pons, vicesecretario de Estudios y Programas del Partido Popular, que no estaba en casa en ese momento. Pero su familia sí estaba. "Entraron en el portal, subieron hasta la casa, aporrearon la puerta durante 45 minutos. Ésta no es la forma de convencerme", manifestó al enterarse de los hechos. Pons, que ha interpuesto una denuncia al considerar que se trata de ataques a "representantes de la soberanía popular", aseguró ayer a El PAÍS: "Asustar a mi familia es un método mafioso. Hoy lo hacen para que los políticos cambiemos el voto. Mañana lo harán con los jueces y pasado con los periodistas. Es muy peligroso. Dicen que me van a señalar, pero señalar es lo que hacían los nazis con los judíos". La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se manifestó de forma similar tras el Consejo de Ministros. Aseguró que algunas actuaciones "invaden los derechos de otros", mientras pedía "respeto" a los políticos y "especialmente a sus familias", que sufren manifestaciones frente a sus casas.

¿Son legales estas actuaciones? ¿Canalizan el malestar social de modo democrático o son meras acciones de coacción? "Las movilizaciones ciudadanas que echan el aliento en la nuca del político, pero solo el aliento, están más que legitimadas", señala Jesús María Osés, profesor de Historia del Pensamiento Político en la Universi-

dad Pública de Navarra. "El límite infranqueable es la violencia física. O que la presión se ejerza contra la familia". La PAH asegura que se trató de una "señalación pública y pacífica", pero González Pons lo ve de manera muy diferente y acusa a la plataforma de "intimidar" a su familia llamando al timbre de su casa.

El señalamiento (o *escrache*) nace en Argentina. *Escrachar* implica evidenciar a personas que pretenden pasar desapercibidas. Los primeros fueron impulsados por Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS). "Ante la impunidad de las leyes de punto final, que impedían juzgar a los responsables de la dictadura, promovieron los señalamientos. Consideraban que si el Estado no daba respuestas, era legítimo que la ciudadanía supiera quienes eran y qué habían hecho", explica Jordi Mir, profesor del centro de estudios sobre los movimientos sociales de la Universitat Pompeu Fabra.

España vive la peor crisis desde la restauración de la democracia y solo el año pasado se ejecutaron 46.408 hipotecas, según datos del Poder Judicial. El drama de los desahucios afecta, de puma, a centenares de miles de personas. En este contexto, "se llega a la conclusión de que las movilizaciones tradicionales no surten efecto. Como no se puede salir de la agenda políti-

ca, se importan medidas extrañas con la esperanza de que funcionen", plantea Juan Carlos Revilla, profesor de Psicología Social de la Complutense.

¿Es comparable la situación argentina y española? "Es difícil apoyarlo sin reservas, porque los diputados no se esconden ni han hecho nada reproachable. Solo han manifestado dudas a la propuesta. Tengo reticencias de que sea la mejor opción", señala Revilla.

La catedrática de ética Victo-

Esta modalidad de queja nace en Argentina tras las leyes de punto final

"Es legítima si es pacífica y no viola el espacio privado", dice Victoria Camps

ria Camps cree que se trata de un ejercicio de libertad de expresión, siempre y cuando se ajuste a unos límites precisos. "Es legítima si es pacífica, se produce en la vía pública y no se viola el espacio privado. Ellos son nuestros representantes. Si la gente quiere que conozcan su realidad, están en su derecho de informar, incluso, si es de forma tan directa".

La jurista Magda Oranich considera que es "lícito, siempre que no haya coacciones ni amenazas", pero se manifiesta en contra. "No creo que sea la mejor forma de presión en democracia. Los diputados han sido elegidos, te guste o no". En su opinión, sería mejor "manifestarse ante el Congreso, pero nunca en el domicilio", porque se coacciona no solo al político, "que lo lleva implícito en el cargo", sino "a sus hijos y vecinos", que nada tienen que ver.

Según una encuesta publicada por EL PAÍS el domingo, el 67% desconocía la campaña de *escrache* de la PAH. Aunque el 89% —el 87% entre votantes del PP— aseguraba estar de acuerdo. El catedrático de Sociología y presidente de Metroscopia, José Juan Toharia, abunda en por qué: "El ciudadano es ambivalente en este tema. Aprecia que existe un riesgo de acoso, pero hay factores que hacen comprensibles estas campañas. La gente ve que la crisis no la provocan quienes la padecen. Además, pagan más los que menos tienen y los que son percibidos como culpables —los expertos financieros— no solo no han pagado, sino que reciben jubilaciones millonarias. Ese es el telón de fondo".

Mir añade: "Nuestra sociedad es más sensible a la alteración del orden que a la violencia estructural, como la pobreza, cuando el verdadero sufrimiento lo padecen los afecta-



Protesta de Afectados por la Hipoteca frente a la casa de Esteban González Pons, en Valencia, el pasado miércoles. / H. KALIS (REUTERS)

dos por la crisis, el desempleo y los desahucios". Esther Vivas, investigadora de movimientos sociales, destaca que "se busca visualizar una realidad; que se

Democráticamente intolerable

FERNANDO SAVATER

Que el ejercicio de la política necesita una revisión a fondo en muchos países europeos —entre ellos desde luego España— es una evidencia que apenas cabe discutir. Los representantes electos dan a menudo la impresión de formar una casta cerrada sobre sí misma, impermeable a todas las demandas populares difíciles de encauzar según las rutinas burocráticas, expertos en disculpar los errores propios agigantando los ajenos y para quienes siempre lo que se hace es lo único que puede hacerse, por mucho sudor y lágrimas que cueste... a la sufrida ciudadanía. Pero la docilidad resignada (o desesperada) de esta parece a punto de acabarse. Hay grupos muy dinámicos que quieren hacerse oír saltándose a los habituales intermediarios y que están dispuestos a lle-

var a las calles los debates que se echan en falta en el Parlamento.

Por tanto va a ser cada vez más corriente que los ciudadanos reclamen directamente a sus representantes y les expongan sus quejas, con maneras mejor argumentadas o más tumultuosas. Pero una cosa es ser escuchados y otra ser obedecidos. Los representantes electos (no digo "los políticos" porque políticos son también, para lo bueno y lo malo, quienes les interpelean) deben tomar en consideración las voces ciudadanas apremiantes que les llegan, aunque no sea por el conducto reglamentario, pero luego tienen que decidir de acuerdo con su leal saber y entender pues para eso fueron votados por mucha más gente de la que suele manifestarse. Que se vean escarnecidos en sus vecindarios, coaccionados con simulacros de linchamiento y se intimide a sus

familias no solo es democráticamente intolerable sino que arroja sombras de sospecha sobre la "espontaneidad" de los que protestan.

Quienes se desgañitan diciendo que sí no se les hace caso no hay democracia sino poco de fiar. Porque la democracia consiste también en procedimientos, garantías y respeto institucional: lo demás es demagogia y populismo, o sea democracia basura. El que crea que una buena causa justifica malos modos debe recordar que abre la puerta a que sean empleados para otras menos de su gusto: hoy puede ser para acabar con los desahucios, pero mañana para abolir la despenalización del aborto o la doctrina *Parrot*, quizá para reivindicar la pena de muerte. Bienvenida la participación más amplia y enérgica de los ciudadanos, no de los *borrokas*.



sociedad

El Gobierno anula las concesiones de TDT



deportes

Crece el lío entre la FIFA, Pandev y Mourinho



ciberpaís

El comercio europeo, contra Google



sujetos a la llamada disciplina de voto. "El hecho de que el diputado piense que debe rendir cuentas solo ante sus jefes supone una quiebra en el sistema", opina Toharía.

Vivas pone el acento en la pugna entre legalidad y legitimidad. "Hay acciones que pueden ser ilegales desde un punto de vista jurídico, como ocupar locales vacíos, y sin embargo son totalmente legítimas". Ayer, 200 activistas de la PAH ocuparon una sede de Banesto en el paseo de Gràcia de Barcelona. "La legalidad es un concepto construido. Lo legal debería ser legítimo y lo legítimo debería hallar un cauce de legalidad, aunque no siempre es así", abunda el psicólogo Jaume Funes. Y ahonda en cómo los jóvenes se rebelan contra los imperativos del sistema: "Para tratar los *escraches* no sirve con invocar que algo es legal. El argumento de muchos jóvenes es: 'será legal, pero no mi legalidad'. No se sienten representados por un sistema que ven injusto". Mir añade: "Las autoridades deberían reflexionar so-

"El verdadero sufrimiento es el de los afectados por la crisis", dice Jordi Mir

"Hay acciones ilegales totalmente legítimas", sostiene una investigadora

vea que detrás de las decisiones políticas hay personas. Esta acción está a la altura de la situación de crisis que vivimos".

La calificación como "violencia" del *escrache* genera también cierta controversia. Quienes las sufren se sienten "acosados" y consideran que se está vulnerando su derecho a la libertad. Hay quienes opinan, sin embargo, que es una reacción

proporcionada a la magnitud de la crisis que azota a los ciudadanos. "La presión de las instituciones sobre las personas obliga a éstas a una legítima defensa", argumenta Osés. El politólogo Íñigo Torrejón asegura que la PAH ha visibilizado lo que antes era una violencia "privada y extrema. Hasta ahora la violencia de echar a una familia a la calle sin que tenga adón-

de ir, era algo privado. La PAH lo ha politizado, lo ha hecho público".

Ada Colau, el rostro visible de la PAH, niega que las actuaciones de la plataforma constituyan ningún tipo de acoso ni hayan superado los límites de la legitimidad: "Nos estamos volviendo locos y hemos dejado de ver el conjunto. El límite no lo han traspasado los ciudada-

nos, sino la *praxis* bancaria y los gobiernos que les inyectan dinero público mientras la gente se tira por la ventana". Según la activista, la plataforma apela "a la conciencia individual de cada diputado", pidiéndole que vaya "más allá de la disciplina de voto del partido".

Sin embargo, en España, con un sistema electoral de listas cerradas, los diputados están

bre los riesgos de carecer de espacios para el debate político más allá de las elecciones". Según el politólogo Errejón, las líneas rojas "se traspasan desde hace tiempo. Hay quien considera que pegar pegatinas y hacer sonar una cacerola es grave. Quizá, pero hace mucho que esta gente no son los primeros en quebrantar las cosas".

Los críticos con estas acciones sostienen sin embargo que se ha traspasado una línea roja fundamental. Y que es preciso poner coto a este tipo de protestas. El portavoz popular en el Congreso, Alfonso Alonso, remitió ayer mismo una carta a los diputados de su grupo en la que señalaba que "algunos compañeros y sus familias han sufrido situaciones de acoso que no debemos pasar por alto" y les indicaba que, ante "cualquier amenaza", mantuviesen la calma e informaran a la dirección del partido, que tomaría las "medidas legales oportunas". La número dos socialista, Elena Valenciano, mostró su apoyo expreso a lo declarado previamente por la vicepresidenta del Gobierno: "Sé que la gente lo está pasando mal", señaló. "Pero no se puede promover la violencia y el acoso a gente a la que se ha votado".

El 'escrache' como derecho donde no lo hay

GUILLEM MARTÍNEZ

¿Es el *escrache* un ejercicio de coacción? Respuesta: sí, absolutamente. Lo que indica que la pregunta es otra: ¿la coacción ciudadana es un derecho? Para el Gobierno, que ayer mismo advirtió que el *escrache* no está contemplado en el derecho de manifestación, no lo es. Para el tipo que firma estas líneas, lo es. O, al menos, es de la opinión de que, ante la coacción financiera, debería de haber algún tipo de derecho. Lo que, a su vez, puede orientar hacia la posibilidad de que la pregunta del millón sea otra: ¿qué derechos le queda a la sociedad frente a la coacción que recibe?

Porque la coacción es llamativa. La democracia, esa cosa que solo fue posible en el Estado, se ha deslocalizado hacia otras instancias no estatales ni democráticas. Los Gobiernos carecen de programas. O son irrele-

vantes, pues las políticas les son indicadas desde otros organismos —BCE, FMI—, no democráticos. El caso *Bárceñas*, incluso, ofrece la sospecha de que las políticas, además, sean incentivadas, previo pago, por empresas. El bienestar, la forma de democracia en Europa, está desapareciendo. Recortes y contrarreformas como la educativa, la sanitaria, la financiera, o la laboral, suponen, por sí mismos, esa desaparición y una coacción social radical. Todo esto ilustra una crisis de representatividad. Amplia. Europea. Que en el Sur es dramática. En España resulta casi imposible hablar —entendiendo hablar como un intercambio— con la clase política que, en su gran mayoría, vive en otra cultura —varias generaciones la llamamos Cultura de la Transición—, cuyos marcos, inamovibles y delimitados hace décadas, solo permiten ver las tensiones de la realidad que hayan

sidio señaladas como tales por los Gobiernos.

No, el *escrache* no es una manera de hablar con diputados. Para ello sería necesario un cambio de cultura en el diputado que, por cierto, haría innecesario el *escrache*. Es una manera de coacción democrática. Las hay. Son antiguas y modularon, en su día, el nacimiento de los derechos sociales: huelga, la protesta, la manifestación. La sociedad empieza a saber mucho de coacción. Y puede discernir entre la coacción posdemocrática —la reducción de derechos que sufre— y las formas de coacción que utiliza en su defensa. El pensador francés Pierre Rosanvallon habla un poco de ello cuando, al tratar del futuro de una democracia en crisis, dibuja un quinto poder, consistente en la ciudadanía en la calle, modulándola. Quizás eso —la posdemocracia y la ciudadanía en la calle— es lo que está pasando.